



*Misión Permanente de la
República Bolivariana de Venezuela
ante la Oficina de las Naciones Unidas
y demás Organismos Internacionales
con sede en Ginebra*

N° 0327 - 2021

La Misión Permanente de la República Bolivariana de Venezuela ante la Oficina de las Naciones Unidas y demás Organismos Internacionales con sede en Ginebra, saluda atentamente a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en la oportunidad de referirse a su comunicación de fecha 17 de febrero de 2021, suscrita por la señora Beatriz Balbin, Jefa de la Subdivisión de Procedimientos Especiales de esa Oficina, mediante la cual fue remitido un comunicado de prensa de fecha 18 de febrero de 2021, titulado "Venezuela: Defensores de derechos humanos puestos en libertad pero se mantienen los cargos en su contra; debe ponerse fin a la criminalización de la sociedad civil", el cual ha sido suscrito por los Relatores Especiales sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y asociación; sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión; y sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos; así como por el Grupo de Trabajo sobre la discriminación contra las mujeres y las niñas.

Según se desprende del contenido del comunicado de prensa, el mismo está referido al caso de cinco (5) personas identificadas como pertenecientes a una organización de nombre "Azul Positivo", quienes fueron beneficiarios de una medida sustitutiva de la privación de libertad dictada por el Juzgado de la causa, en el juicio que se les sigue por la comisión de delitos comunes.

Al respecto, la Misión Permanente de la República Bolivariana de Venezuela ante la Oficina de las Naciones Unidas y demás Organismos Internacionales con sede en Ginebra, tiene a bien remitir adjunto al presente, constante de tres (3) folios útiles, comunicación N°000153, de fecha 18 de febrero de 2021, suscrita por el Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza Montserrat, dirigida a la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, señora Michelle Bachelet, en respuesta a este asunto.

La Misión Permanente de la República Bolivariana de Venezuela ante la Oficina de las Naciones Unidas y demás Organismos Internacionales con sede en Ginebra, agradece a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que, la citada comunicación sea sometida al conocimiento y consideración de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, señora Michelle Bachelet; así como de los Relatores Especiales sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y asociación; sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión; y sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos; y del Grupo de Trabajo sobre la discriminación contra las mujeres y las niñas.

La Misión Permanente de la República Bolivariana de Venezuela ante la Oficina de las Naciones Unidas y demás Organismos Internacionales con sede en Ginebra, aprovecha la ocasión para renovar a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, las seguridades de su más alta consideración.



Ginebra, 22 de febrero de 2021

Honorable señora
Michelle Bachelet

Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
Ginebra



*El Ministro del Poder Popular para
Relaciones Exteriores
de la República Bolivariana de Venezuela*

DM N°000153

Caracas, 18 de febrero de 2021

Tengo a bien a usted en la oportunidad de expresar el firme rechazo de la República Bolivariana de Venezuela por el comunicado de prensa de fecha 18 de febrero de 2021, suscrito por varios Relatores Especiales del Consejo de Derechos Humanos, sobre el caso de cinco miembros de la ONG "Azul Positivo".

En el comunicado se hace referencia a la puesta en libertad de estas personas el pasado 10 de febrero de 2021, las cuales fueron detenidas a principios del presente año por los cuerpos de seguridad del Estado, por haber incurrido en la comisión de los delitos de manejo fraudulento de tarjeta inteligente o instrumentos análogos; asociación para delinquir; y legitimación de capitales, tipificados en el ordenamiento jurídico venezolano. En su juicio, se les ha garantizado plenamente los derechos constitucionales a la defensa y al debido proceso, en estricto apego a la legislación nacional.

Es importante señalar que estas personas empleaban tarjetas inteligentes para recibir divisas del exterior sin el debido control legal, violando de manera flagrante las normas establecidas en mi país sobre la legitimación de capitales, al punto de que el Coordinador Residente /Coordinador Humanitario de la ONU se vio en la obligación de suspender, *motu proprio*, la modalidad de Programas de Transferencia Monetarias, hasta tanto se logre convenir con las autoridades competentes un procedimiento acorde al marco jurídico nacional.

El Gobierno venezolano denuncia enérgicamente la forma irresponsable en la cual se han descrito los hechos en el citado comunicado, plagado de falsas alegaciones y de afirmaciones sin ningún fundamento, tergiversando la verdad de lo que realmente ha acontecido en este caso, con la intención de continuar la infame campaña internacional de desprestigio contra el Estado venezolano, sus instituciones democráticas, y el legítimo Gobierno Bolivariano encabezado por el Presidente Nicolás Maduro Moros.

Honorable Señora
Michelle Bachelet
Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos
Ginebra.-



*El Ministro del Poder Popular para
Relaciones Exteriores
de la República Bolivariana de Venezuela*

Es muy preocupante que estos Relatores Especiales hayan puesto en juego su credibilidad y reputación al suscribir este comunicado carente de todo rigor científico, sin fuentes comprobables y sin aportar ningún elemento o indicio probatorio que corrobore lo que con tanto ahínco afirman. Sin duda alguna, acciones como éstas hacen un gran daño a la noble labor de la promoción y protección de los derechos humanos y a la confianza que los Estados soberanos hemos depositado en las instituciones de las Naciones Unidas dedicadas a esta digna labor.

Resulta muy grave, por ejemplo, que en el comunicado de prensa se afirme que "Las detenciones y acusaciones penales forman parte de un patrón de criminalización creciente en contra de las organizaciones de la sociedad civil en Venezuela (...)". Tan irresponsable e inaudita aseveración carece de sustentación alguna, y pone en duda la integridad ética y profesional de los Relatores. Es reprochable que los titulares de mandato de los Procedimientos Especiales se hayan embarcado en la suscripción de temerarias afirmaciones e infundados cuestionamientos, incluso contra la "Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia" violando el sagrado derecho soberano del Estado venezolano a dictar sus propias normas con estricto apego al principio de la legalidad que rige las actuaciones de los Poderes Públicos, sometidos a la Constitución y al imperio de la ley.

Esta Ley, valga la pena recordarlo, creó la Comisión para la Promoción y Garantía de la Convivencia Pacífica, bajo cuyo accionar cientos de personas procesadas por su participación en hechos violentos, en el pasado reciente, fueron beneficiadas por el indulto decretado por el Presidente Nicolás Maduro en su favor en agosto del año 2020, y muchas otras fueron beneficiadas de medidas alternativas a la privación de libertad.

Señora Alta Comisionada,

El Estado venezolano concede gran importancia a la labor de las personas dedicadas a la promoción de los derechos humanos, y a su colaboración con las instituciones del Estado que son garantes de estos derechos fundamentales, de conformidad con la Constitución y las leyes. Venezuela garantiza el trabajo de las personas dedicadas a la promoción y protección de derechos humanos, otorgando las condiciones necesarias para que éstos realicen libremente sus actividades.



*El Ministro del Poder Popular para
Relaciones Exteriores
de la República Bolivariana de Venezuela*

En consecuencia, la grave conducta de estos Relatores Especiales viola de manera flagrante los principios que rigen las actuaciones de los Procedimientos Especiales en el ejercicio de sus mandatos, contenidos en el Código de Conducta aprobado mediante la Resolución 5/2 del Consejo de Derechos Humanos, que los obliga a preservar la imparcialidad, objetividad e independencia en todas sus actuaciones, y a no prestarse a formar parte de acciones adelantadas por los factores desestabilizadores, como los que están involucrados en la acometida multidimensional contra Venezuela.

Alertamos a los titulares de mandato de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas -cuyos nobles mandatos Venezuela apoya de manera firme e incondicional-, a no dejarse llevar ni permitir ser engañados en su buena fe, por estos factores inescrupulosos empeñados en seguir utilizando la causa de los derechos humanos como instrumento político al servicio de oscuros intereses imperiales y hegemónicos, en contra los países del Sur que no se pliegan a sus designios.

La República Bolivariana de Venezuela reitera su compromiso ineludible con la vigencia de los derechos humanos, así como su compromiso de seguir cooperando con el Consejo de Derechos Humanos, sus mecanismos, y con la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Con mis sentimientos de estima y respeto, quedo de Usted,


Jorge Arreaza
Ministro